

Ojo a la financiación política

ELISABETH
UNGAR
BLEIER *



CUANDO SE APROXIMAN LAS ELECCIONES de 2014, es importante —nuevamente— prestar atención al tema de la financiación de las campañas. Si bien, en principio, los aportes que particulares y empresas hacen a candidatos son una forma legítima de participación política, con mucha frecuencia son utilizados para ejercer presiones indebidas sobre los elegidos, para obtener contratos y nombramientos de familiares o conocidos, para influir en la elaboración de los pliegos licitatorios, o para incidir en decisiones futuras que el servidor público pueda tomar una vez tome posesión de su cargo, para mencionar sólo algunos de los abusos relacionados con el financiamiento privado.

Hace algunos meses me referí a los resultados de la tercera encuesta nacional sobre prácticas contra el soborno en empresas colombianas, realizada por Transparencia por Colombia con el apoyo de la Universidad Ex-

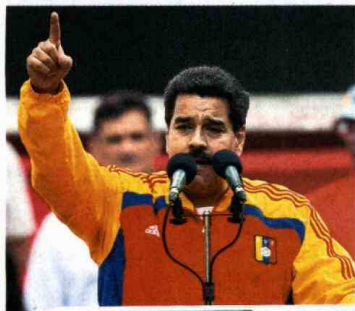
ternado de Colombia. Uno de los resultados que arrojó el estudio fue el aumento de la percepción de que los aportes de contribuciones privadas a campañas y partidos políticos son una de las modalidades de soborno más utilizada. Asimismo se constató que aun cuando la mitad de las empresas realizan contribuciones a campañas políticas, los controles y transparencia sobre las mismas son casi inexistentes. Si bien el 50% de los empresarios tiene como regla hacer contribuciones políticas, sólo un 6% lleva un registro contable exacto sobre las mismas, y un bajo porcentaje, el 4%, brinda información a quien la solicite.

Más recientemente se realizó una réplica de esta encuesta a un grupo de empresas del sector hidrocarburos (en total se encuestaron 588 empresarios), ligadas a importantes compañías petroleras y de proveeduría y apoyo (estudio en edición). Nuevamente, éstos identifican la financiación política como una forma de soborno. No obstante, si bien el 54% de las empresas del sector tiene como regla no dar contribuciones políticas, el 31% de las que sí lo hacen no cuenta con ningún mecanismo para hacerle seguimiento a estos aportes.

Teniendo en cuenta la creciente importancia del sector de hidrocarburos para la economía y el desarrollo del país, los montos de las ganancias que esta actividad genera para las grandes empresas y su cadena de valor, y la magnitud de los negocios involucrados, es deseable aunar esfuerzos para que sus aportes a las campañas políticas sean públicos; que éstas definan claramente sus políticas de donaciones electorales; que los ciudadanos y las mismas empresas puedan hacerles seguimiento y les exijan rendición de cuentas a quienes financian. Por supuesto estas sugerencias son aplicables a todos los financiadores privados, y no solamente a los que están vinculados a este sector.

Si bien las campañas aún no han comenzado oficialmente, que los financiadores privados asumieran públicamente y desde ya el compromiso de no utilizar la financiación como un mecanismo para obtener favores y privilegios sería una muestra de responsabilidad política con el país. Muchos dirán que es un llamado ingenuo y posiblemente lo es. Pero también es una manera de darle mayor alcance a la responsabilidad social empresarial de la que muchos se precian.

DE LABIOS PARA AFUERA



“Se los digo suavemente, si quieren”.

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, en otra de sus arremetidas contra la prensa del país que dirige. En particular habla del “Diario 2001”, que informó sobre un problema con la gasolina y las estaciones de servicio. “Es un delito”, dijo Maduro.

Betto



Cara de papa

EPU: requerimientos pese a reconocimientos

GUSTAVO
GALLÓN
GIRALDO *



POR LO MENOS SEIS PREOCUPACIONES sobre la situación de derechos humanos en Colombia quedaron en evidencia en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas el pasado 19 de septiembre, al discutirse y aprobarse el informe sobre el Examen Periódico Universal (EPU) practicado a nuestro país el 23 de abril.

La impunidad previsible por el fortalecimiento del fuero militar fue una de ellas. Gran Bretaña insistió en la necesidad de “pedir al gobierno colombiano que publique información regular sobre investigaciones por abusos de derechos humanos denunciados contra militares”.

Filipinas insistió también en que se ratificara el Protocolo Adicional a la Convención contra la Tortura, que autoriza visitas internacionales a los centros de detención. Sólo Colombia en Latinoamérica se opone al protocolo, supuestamente porque tiene mecanismos internos para garantizar los derechos de personas privadas de libertad.

Esta insistencia puso de presente una tercera preocupación relacionada con la ratificación de otros tratados, como los protocolos adicionales para autorizar denuncias individuales por violaciones a la Convención de Derechos del Niño, al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales o a la Convención sobre Desapariciones Forzadas. No hay razón valedera tampoco para que no se haya autorizado durante este gobierno la visita de relatores de Naciones Unidas al país, a pesar de que teóricamente Colombia tiene formulada una invitación abierta a dichos mecanismos.

Una cuarta preocupación recayó sobre los derechos de las mujeres y la violencia sexual, tema que fue levantado por el propio Gobierno para informar que hay 257 casos de violencia basada en género revisados por la Fiscalía. No es un resultado digno de orgullo, y menos si se tiene en cuenta que de 182 casos de violencia sexual que la Corte Constitucional le ordenó a la Fiscalía investigar, mediante el auto 092 de 2008, escasamente se han producido tres sentencias, según el quinto informe divulgado la semana pasada por la Mesa de Seguimiento a dicho auto.

Gran Bretaña hizo énfasis también en la

situación de defensoras y defensores de derechos humanos por el incremento del número de asesinatos en el primer semestre de 2013. Pero tal vez la preocupación mayor fue la relacionada con la prórroga del acuerdo para mantener en Colombia la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El vicepresidente había anunciado en abril, ante el Consejo en Ginebra, que dicha prórroga sería por tres años. Que no se hubiera honrado ese anuncio y que el Gobierno hubiera autorizado esa prórroga sólo por un año causó entonces gran extrañeza. Nadie la expresó en público, pero pocos se abstuvieron de hacerlo en los pasillos.

La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y las conversaciones de paz en La Habana obviamente generaron reconocimientos hacia el Gobierno en esta aprobación del EPU que los miembros del Consejo hacen cada cinco años a todos los estados. Pero tales reconocimientos no llegaron al punto de desvanecer preocupaciones como estas seis, que seguirán siendo observadas atentamente durante los próximos cinco años en relación con nuestro país.

* Director de la Comisión Colombiana de Juristas. Las fuentes de esta columna pueden verse en www.coljuristas.org.

EL ESPECTADOR

El Espectador. Editado por Comunican S.A.
Calle 103 N° 69B-43 Bogotá, Colombia
Commutador: 4232300 Fax: 4055602
Línea de servicio al cliente Bogotá 4055540
Línea de servicio gratuita nacional
018000510903 Redacción: 4234822
Suscripciones: 4055540 o a la línea gratuita
nacional 018000510903 Publicidad:
Caracol Unidad de Medios: 4232300
ext. 1290 - 1565 www.elespectador.com

Cartas de los lectores

El concejal

Si el concejal Carlos Martínez no puso en riesgo la vida de muchos transeúntes y de los policiales, entonces, ¿qué hizo?

Una pequeña pilatuna, según el fiscal del caso, que no encontró méritos para llevarlo ante el juez de garantías, después de observar que embistió a los funcionarios con el vehículo que conducía y desplegó una huida temeraria. Qué pena con el cabildante, haber sido perseguido por poca cosa. Así no funcionan la disciplina social y la convivencia ciudadana.

Se necesita que las autoridades evalúen con juicio los riesgos a que es sometida la sociedad con estas conductas reprochables y la vulneración de los reglamentos y del Código Penal, para que impongan sanciones ejemplarizantes y más a quien tiene el deber de cuidado por su investidura.

Si embestir con el vehículo a un funcionario con autoridad no es una conducta penal, ¿qué es? Qué bueno que se le hubiera permitido al juez constitucional dilucidar sobre la legalidad y la tipificación. ¿Qué pasará en adelante cuando todos los infractores se nieguen a que se les practique la prueba de alcoholemia o sólo accedan después de las 6 horas, cuando ya hayan desaparecido las trazas del licor? Este fue el ejemplo que dio el concejal y la jurisprudencia que sentó la Fiscalía. ¿Por qué tanta demora en la aplicación de los protocolos, cuando se estaba frente a un caso que por su sensibilidad ameritaba toda la acuciosidad necesaria, ya que las más ofendidas habían sido la seguridad y la convivencia ciudadanas, que son bienes intangibles y superiores de la sociedad, que corresponde a todos mantener indemnes? Que un hecho de esta magnitud quede sin sanción cuando existen las herramientas jurídicas, es abrir un boquete para su reincidencia. Basta con tener recursos para pagar las multas administrativas y relevarse de toda la responsabilidad, aun de la penal, así sean las dos totalmente independientes.

Édgar Bejarano. Bogotá.

Envíe sus cartas a
lector@elespectador.com.